

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-313-2020, RUC 2040306331-3, del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, por sentencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se dio lugar a la demanda de desafuero por término del plazo estipulado en el contrato individual de trabajo, interpuesta por Working Group Servicios Profesionales SPA. en contra de Analya Andrea Arenas Córdova.

La parte demandada interpuso recurso de nulidad, que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, el once de mayo de dos mil veintiuno.

En contra de esta decisión, la misma parte presentó recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer estos autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que la materia de derecho que el demandante solicita unificar consiste en “*precisar el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 174 del Código del Trabajo, en tanto ella otorga al juez del trabajo una facultad para autorizar — o no hacerlo- la desvinculación de un trabajador amparado por la inamovilidad o fuero.*”

Reclama que los fallos de esta Corte, que acompaña como contraste, establecen la correcta aplicación de la norma antedicha, precisando que la citada disposición determina sin duda alguna una potestad, el ejercicio de un imperio por parte del juez, tanto a propósito de las causales subjetivas, como de las objetivas, ambos casos en que el sentenciador está imbuido de la misma facultad y, por tanto, le corresponde al juez examinar los antecedentes incorporados al proceso, para decidir en sentido positivo o negativo. Agrega que, si así no fuera, no se entiende la entrega que se le hace de competencia para decidir un conflicto como el de que se trata; si la norma en estudio consultara sólo la constatación del pacto



de un determinado plazo y su vencimiento, no se divisa la razón por la que expresamente se instauró la obtención previa de la autorización judicial para proceder a la desvinculación de una dependiente en estado de gravidez conocido por el empleador.

Solicita en definitiva se acoja el recurso, se unifique la jurisprudencia y, sin nueva vista, en sentencia de reemplazo se haga lugar a sus pretensiones.

**Tercero:** Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

En tal sentido, para dar lugar a la unificación de jurisprudencia se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos contenidos en las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, se hace necesario consignar, en forma previa, los hechos establecidos en la sentencia de base:

1.- Doña Analya Arenas Córdova ingresó a prestar servicios para la empresa demandante el 6 de enero de 2020, como técnico en rehabilitación para el programa de “Rehabilitación y tratamientos de personas adultas en situación de calle, con consumo problemático de alcohol y otras sustancias”, celebrando un contrato de plazo fijo que vencía el 31 de diciembre de 2020.

2.- La demandada fue madre el 14 de noviembre de 2020 y el demandante ingresó la solicitud de desafuero el 24 de noviembre de ese año.

3.- Los servicios que prestó la demandada eran ejecutados para un programa financiado por SENDA con una duración que variaba entre dieciocho meses y dos años, pudiendo concluir antes, siendo la señora Arenas contratada para la primera etapa que consistía en las bases técnicas del mismo a ejecutarse



el año 2020, desarrollándose el año 2021 la fase referente a los aspectos sicosociales.

Sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura del fondo consideró que habiéndose manifestado el interés del empleador de obtener la autorización judicial de desafuero maternal de la demandada, se aprecia que objetivamente se verificó el transcurso del tiempo acordado expresamente por las partes para la vigencia de la relación laboral, lo que es suficiente para acoger la demanda de autos. A su vez, al pronunciarse sobre la oposición de la demandada, expresa que no existe una eventual colisión de derechos fundamentales con el hecho de acoger la demanda, desde que de existir una supuesta contienda de derechos (entre ellos, aquellos de resguardo constitucional como la protección del menor que está por nacer) el propio legislador lo habría advertido, pero por el contrario, aun cuando la trabajadora embarazada es titular por sí y por el niño o niña que está por nacer de una serie de derechos y garantías, el legislador reconoce la posibilidad que el juez laboral en algunos casos pueda separar de su trabajo a la dependiente aforada, encontrándose dentro de estos, cuando el vínculo contractual fue sometido a una temporalidad advertida y conocida por las partes desde el inicio de la relación laboral.

Añade que, bajo el mismo razonamiento, asumir que la autorización judicial pedida por la empresa en contra de la trabajadora es discriminatoria por ser mujer, es un argumento errado, considerando que en la especie se trata de una trabajadora que siempre supo que su contrato concluía el 31 de diciembre de 2020.

Motivos por los cuales, acoge la demanda y autoriza el despido de la demandada.

El tribunal de nulidad, conociendo el recurso deducido por la trabajadora, consideró que *“...en concepto de esta Corte, en el caso sub lite, como ya se dijo, la trabajadora fue contratada en virtud de un contrato de plazo fijo, el cual llegó a su fin el pasado 31 de diciembre, lo que se traduce en que no se ha incurrido en infracción al artículo 174 del Código del Trabajo, contando el juez con la facultad de poder acoger o denegar la solicitud de desafuero.”*

**Quinto:** Que, a modo de contraste, el recurrente acompañó tres sentencias de esta Corte en los N°12.051-2013, 14.140-2013 y 3.841-2018, de las que no se exigió certificación de que se encontraban firmes y ejecutoriadas, por cuanto al emanar de este tribunal no proceden recursos en su contra.



Los tres procesos corresponden a recursos de unificación de jurisprudencia, cuya materia de derecho propuesta es la procedencia de autorizar el término de un contrato individual de trabajo a plazo fijo cuando la trabajadora que lo celebró goce de fuero maternal. En el N°12.051-2013 se trata de una trabajadora que se desempeñó como asistente de aula de un establecimiento educacional; el N°14.140-2013 la parte demandante era el Fisco de Chile en representación de la Dirección de Sanidad de la Armada, quienes solicitaron la autorización judicial para despedir a una dependiente que gozaba de fuero maternal, contratada con fondos propios de la institución, por el vencimiento del plazo acordado en el contrato individual de trabajo. Por último, en el N°3.481-2018, el demandante es una institución bancaria que celebró un contrato individual de trabajo a plazo fijo con la demandada aforada.

**Sexto:** Que, efectuado el análisis de procedencia del recurso que se analiza, se debe concluir que no puede ser acogido, por cuanto los hechos establecidos en los fallos presentados a modo de contraste, difieren de los comprobados en el recurrido.

En efecto, en la decisión que se revisa, quedó establecido que la demandada fue contratada para desempeñar funciones para la demandante que eran financiadas por un programa de SENDA, el que tenía una duración determinada, que la dependiente debía cumplir las labores en la primera etapa de éste, correspondiente al año 2020, toda vez que en la segunda fase del mismo, año 2021, las labores a desempeñar eran diversas a las ejercidas por la señora Arenas.

A diferencia de estos razonamientos, en los fallos de contraste todas las demandadas, si bien, se encontraban vinculadas por un contrato a plazo fijo, su contratación fue directa por sus empleadores, sin que la existencia de las labores que desempeñaban tuviesen su origen en un convenio celebrado por el o la demandante y un tercero, con la finalidad de ejecutar una determinada función.

**Séptimo:** Que teniendo en consideración lo expuesto, queda de manifiesto que las sentencias acompañadas no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que la decisión se erigió sobre la base de circunstancias fácticas diversas, no cumpliéndose, por tanto, con el presupuesto previsto en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la trabajadora.



Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Talca de once de mayo de dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°39.249-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Guillermo Silva G., señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., el Ministro Suplente señor Raúl Mera M., y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz L. No firma el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.



En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

